

¿Valdrá la pena votar?

Cuando alcancé la edad de votar, el predominio absoluto del PRI hacía inútiles las encuestas y las proyecciones para anticipar los resultados electorales; todos sabíamos quienes iban a ganar. Así, cuando en Estados Unidos presumían que su sistema electoral era tan avanzado que les permitía conocer en horas al ganador de una elección presidencial, nosotros argumentábamos con ironía que el nuestro estaba por delante, porque el nombre del candidato triunfador lo sabíamos meses antes de la elección.

Aun así, muchos acudíamos a las urnas con el ánimo de dejar un testimonio en contra del partido gobernante. Pensar que la suma de los votos de la oposición y el abstencionismo resultaba mayor que los votos del PRI, equivalía a una especie de victoria moral, aunque claro, sin ninguna trascendencia práctica.

Sin embargo, vale la pena señalar que un largo período de crecimiento económico con baja inflación colocó a buena parte de la población en una zona de confort; para qué cambiar lo que funciona. Más aún, cuando en apariencia las nuevas generaciones escalaban peldaños por encima de sus predecesoras. Por ello, se obviaban los vicios del partido hegemónico y cuando incurría en excesos, muchos no sólo volteaban hacia otra parte sino también aplaudían.

Por ello, no fue casual que las evidencias del agotamiento de los modelos político y económico empezaran a manifestarse casi de manera simultánea. El primero en 1968 y el segundo en 1970. Aunque todavía debió pasar un sexenio, durante el cual la guerrilla urbana y rural cobró relevancia, para que en 1977 se llevaran a cabo reformas señeras al sistema electoral, que empezaron a facilitar el acceso de la oposición a los poderes públicos.

Veintitrés años después, un candidato que no provenía del PRI alcanzó por vez primera la presidencia de la República, lo cual fue en gran parte el resultado de un proceso continuo de reformas políticas encaminadas a emparejar la cancha para todos los partidos y garantizar la autonomía del órgano electoral. Hechos que no fueron gestos generosos de los gobiernos priistas, sino la consecuencia de una persistente presión social y del esfuerzo de muchas personas, algunas de las cuales incluso lo pagaron con sus vidas.

Así, el año 2000 marcó un hito importante en el desarrollo de la democracia en México. El cambio civilizado del partido al frente del Poder Ejecutivo nos dio confianza; el país había alcanzado una especie de mayoría de edad, que en principio debería ser el preámbulo de mayores avances en nuestro desarrollo político.

Asumimos con ingenuidad, que el solo hecho de que existiera limpieza e igualdad en la competencia política, era suficiente para colocar al frente de los tres poderes públicos a servidores públicos con vocación de servicio y cuyo desempeño debería expresarse en un Estado más eficaz en proveerle a la población el mayor grado de bienestar posible, en la expresión más amplia del término.

También suponíamos que ahora sí, los contrapesos constitucionales serían la garantía de que prevalecería el imperio de la ley. Además de que la alternancia dejaba en claro que de ahí en adelante ningún partido tenía garantizada la permanencia el poder y que los mandatos constitucionales son encomiendas temporales, sujetas a prueba y, por ende, a la rendición de cuentas.

Quince años después de ese 2 de julio, creo que nuestras expectativas fueron en exceso optimistas, y que no consideramos que la transformación de la cultura política que había imperado hasta ese entonces sería un proceso lento, tortuoso e incluso regresivo. Para ello basta comparar al IFE de aquel entonces con el actual INE; el de ayer un consejo de ciudadanos, el de ahora, uno de partidos.

El cadáver del viejo presidencialismo parece haber sido cubierto por una masa amorfa, integrada múltiples organismos de naturaleza muy diversa, a la que denominamos clase política. Ésta, al nutrirse de ese cuerpo en descomposición, ha reproducido sus genes aunque de manera fragmentada, dando lugar a feudos de diferentes tamaños y características, que están presentes en los tres poderes de la Unión y en los tres órdenes de gobierno, y en lo que ni la ineptitud más evidente, ni la deshonestidad más obvia representan un obstáculo para pertenecer a ellos y menos para encabezarlos.

Esta *feudalización* del Estado aunado a su crónica debilidad institucional, lo hacen poroso e ineficaz para elevar su nivel de vida y para garantizarle a la población algo tan básico como su seguridad, por lo que se ha ido arrinconando en la medida que mafias de todo tipo y calibre han ido coartando su libertad.

El politólogo español Juan José Linz afirmó que no hay democracia sin Estado. Y esto es justo lo que nos está pasando. No se diga si además consideramos que hasta hoy el imperio de la ley es una ilusión y la rendición de cuentas una aspiración que en este momento se antoja inalcanzable.

¿Qué hacer? nos preguntamos. ¿Valdrá la pena seguir votando para legitimar a una clase política que sólo usa a la democracia como coartada para preservar y engrandecer sus privilegios y seguir mamando de la ubre presupuestal? ¿Será que nos ha tocado vivir la etapa de empeoramiento como el paso inevitable hacia un mejor porvenir, que quizá ni veremos?

Tenemos cuatro meses para pensarlo.

